



## *Cámara Federal de Casación Penal*

**Registro N° 110/26**

///la ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de marzo de 2026, se reúne la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los señores jueces doctores Diego G. Barroetaveña -Presidente-, Alejandro W. Slokar y Carlos A. Mahiques -Vocales-, asistidos por el secretario actuante, con el objeto de dictar sentencia en la causa **FCB 39955/2019/TO1/14/CFC4**, caratulada **"HERRERA, Cristian Eduardo y otros s/recurso de casación"**, de la que **RESULTA:**

I. Que por decisión de fecha 20 de noviembre de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de Córdoba, en la causa n° FCB 39955/2019/TO1 de su registro, en lo que aquí interesa, resolvió: **"I.- DECLARAR** la inconstitucionalidad del art. 1 del Decreto Reglamentario 608/2024, en cuanto dispone incluir dentro del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social, el delito previsto en el art. 15 inc. 'c' de la Ley 24.769 (Asociación Ilícita Fiscal); **II. NO HACER LUGAR** al pedido de sobreseimiento de [...] Cristian Eduardo Herrera, Micaela Schörnig, Ignacio Guillermo Herrera y Carlos César Bonaldi en orden al delito de asociación ilícita fiscal [...] (arts. 15 inc. C del Régimen Penal Tributario Ley 27.430, 336 inc. 1 del CPPN y 59 inc. 2 del CP, a contrario sensu)".

Contra dicho pronunciamiento, las defensas de Cristian Eduardo Herrera, Ignacio Guillermo Herrera, Micaela Schörnig y Carlos César Bonaldi interpusieron recursos de casación, que fueron concedidos y mantenidos en esta instancia.



Asimismo, dedujo recurso de casación la querella de la UIF, el cual fue concedido y mantenido en esta instancia.

**1°) Recurso interpuesto por la defensa particular de Cristian Eduardo Herrera, Ignacio Guillermo Herrera y Micaela Schörnig.**

Que el recurrente soportó su reclamo en el primer inciso del art. 456 del rito.

En primer término, sostuvo que en el *sub examine*: "Se le ha otorgado a la figura penal del art. 15 inc. c) del Régimen Penal tributario [...], un tratamiento especial al margen del cuerpo legal que integra, pretendiendo excluirla de los efectos de la amnistía prevista en la ley 27.743, en especial de su artículo 5 y [de] su reglamentación a través del art. 1° del decreto del PEN nro. 608/2024".

Asimismo, aseveró que: "...el Tof ha limitado arbitrariamente el sentido de la norma del art. 5 de la ley 27.743, toda vez que el texto no hace diferenciación alguna respecto al alcance de la extinción del pago de las acciones penales tributarias, n[i] precisa delito en particular...".

De otra banda, sindicó que: "...restringir el ámbito de aplicación de los beneficios que la ley 27.743 prevé para los contribuyentes que optaron por regularizar su situación fiscal y tributaria con el fisco, implica debilitar el andamiaje legal montado por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo Nacional".

En esa línea, afirmó que: "la ley 27.743 respondió a una necesidad recaudatoria, finalidad [...] compatible y coherente con el sentido del Decreto 608/2024,

---

Fecha de firma: 19/03/2026

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA



#39564682#494061484#20260319113734856



## *Cámara Federal de Casación Penal*

pues la eficacia, efectividad y éxito de un plan de recaudación acompañado de una amnistía fiscal está directamente relacionado con el alcance de dicho beneficio...".

A mayor abundamiento, adunó que: "...las expresiones 'contribuyentes' y 'obligaciones tributarias' están inescindiblemente vinculad[a]s con el delito de asociación ilícita fiscal; toda vez que el tipo penal [...] se trata de una organización destinada a cometer, colaborar, o coadyuvar en la comisión de delitos tributarios, que, por su naturaleza de delitos especiales propios, exigen la calidad de contribuyente y la preexistencia de una obligación tributaria".

Sobre el particular, expresó que: "...el delito de asociación ilícita fiscal es un delito autónomo, pero no independiente de los delitos para los cuales fue constituida".

En ese orden, refirió que: "...el art. 1° del decreto 608/24, como reglamento de ejecución, aclara y precisa con razonabilidad y en los límites de esa facultad la ley objeto de reglamentación. Cuidadosamente se encarga de precisar que no toda asociación ilícita fiscal está alcanzada por la amnistía sino aquellas en el marco de las cuales se hayan consumado las evasiones regularizadas en los términos de la ley 27.743".

Así, solicitó que se haga lugar al recurso interpuesto, se case la resolución en crisis y se sobresea a sus defendidos por aplicación del art. 1° del decreto n° 608/2024 en función del art. 5° de la ley n° 27.743.

**2°) Recurso interpuesto por la defensa pública oficial de Carlos César Bonaldi.**



Que el casacionista encarriló su reclamo en ambos incisos del art. 456 del rito.

En primer término, sindicó que: "...el Decr. del P.E.N. 608/2024 es producto de una facultad expresa otorgada por mandato constitucional al presidente de la Nación conforme el art. 99 inc. 2° y es concordante también con los arts. 1°, 28, 75 inc. 32 y 76 de nuestra Carta Magna".

En esa dirección, advirtió que: "...el sr. presidente se ha limitado dentro de sus atribuciones constitucionales a reglamentar la ley 27.743 [...], que refiere a la amnistía de todos los delitos tributarios y comprende claramente a la asociación ilícita fiscal, prescripta por el art. 15 inc. 'c' de la ley penal tributaria, como uno de los delitos pasibles de ser adheridos al blanqueo, con la consecuencia extinción de la acción penal y [el] sobreseimiento posterior".

Así, aseveró que: "...no se observa en el decreto cuestionado [...] que el P.E.N. se haya extralimitado o atribuido funciones parlamentarias reservadas exclusivamente al Poder Legislativo de la Nación y tampoco [...] que se haya alterado el espíritu de la norma con la excepción reglamentaria, con lo cual el art. 28 CN no se ve conmovido ni afectado en forma alguna".

De seguido, postuló que: "...habiendo cancelado oportunamente la deuda tributaria el coimputado Cristian Herrera [...] procede de pleno derecho la extinción de la acción penal por el delito de asociación ilícita fiscal a su respecto y también en favor de [su] defendido Carlos C. Bonaldi...".

---

Fecha de firma: 19/03/2026

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA



#39564682#494061484#20260319113734856



## *Cámara Federal de Casación Penal*

Sobre ello, señaló que: "...en caso de que el sobreseimiento por extinción de la acción penal prospere respecto a la asociación ilícita fiscal [...] desaparecerían los supuestos hechos ilícitos investigados -lavado de activos- y en consecuencia la acusación en contra de [su] defendido se desvanecería por completo", habida cuenta que: "...el delito de lavado de activos prescripto por el art. 303 del CP [...] reprochado [...], requiere necesariamente para su consumación de un delito precedente, en este caso la asociación ilícita fiscal...".

*Ad finem*, solicitó que se haga lugar al recurso interpuesto y se disponga el sobreseimiento definitivo de su pupilo por la extinción de la acción penal.

### **3°) Recurso interpuesto por la querella - UIF.**

Que el recurrente sustentó su reclamo en el primer inciso del art. 456 del rito.

En primer término, señaló que: "...surge de manera clara e indubitable [...que] el delito de asociación ilícita fue incluido entre los delitos con posibilidad de ser amnistiado".

En esa dirección, postuló que: "Para poder calificar a un decreto reglamentario como excesivo y, en consecuencia, contrario a la norma que reglamenta y de esta manera descalificar su validez, debe excluir supuestos contemplados en la norma de manera irrazonable. Es decir, debe imposibilitar a los ciudadanos el acceso a los derechos consagrados en la norma con criterios ajenos a la misma".

A más, advirtió que: "...la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo se encuentra limitad[a] por la letra de la ley sancionada por el Congreso y no por el debate



parlamentario como lo pre[tende] el Tribunal Oral Federal", en tanto: "...la utilización de los antecedentes y debates parlamentarios en una técnica de interpretación de la ley que no guarda ninguna relación con la facultad del presidente de la Nación para reglamentar una ley".

De otra parte, sindicó que: "...el art. 1 del decreto reglamentario 608/2024 tiene la función de zanjar una cuestión controvertida hace años en la jurisprudencia que ha motivado opiniones divergentes como es la posibilidad de amnistiar al delito de asociación ilícita fiscal cuando sus integrantes han cancelado las deudas tributarias originadas en el marco de aquella. Lejos de establecer una excepción por vía reglamentaria, el Poder Ejecutivo ha incluido al delito contemplado en el art. 15 inc. C de la ley 24769 (modificada por ley 27.430) para clarificar cuales serán los beneficios que obtendría el ciudadano al regularizar su deuda".

En ese orden, ponderó que: "...las medidas de política criminal le corresponden al Congreso de la Nación y la política económica al Poder Ejecutivo, motivo por el cual al dictarse el decreto reglamentario 608/2024 no ha existido ningún exceso, toda vez que el mismo especifica los pormenores necesarios para la aplicación de la ley 27.743".

Finalmente, solicitó que se haga lugar al recurso interpuesto, se case la resolución en crisis y se dicte el sobreseimiento de los encartados en orden al delito de asociación ilícita fiscal.

**II.** Que se pusieron los autos en Secretaría por diez días a los efectos contemplados en los arts. 465 primera parte y 466 del CPPN, oportunidad en la que se

---

Fecha de firma: 19/03/2026

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA



#39564682#494061484#20260319113734856



## *Cámara Federal de Casación Penal*

presentaron el representante del Ministerio Público Fiscal, que solicitó que se rechacen los recursos interpuestos por los argumentos a los que cabe remitirse *brevitatis causae* y la asistencia técnica de Carlos César Bonaldi, que reeditó los argumentos de la pieza casatoria.

**III.** Que, superada la etapa prevista en los arts. 465, último párrafo y 468 del CPPN, el defensor particular de Cristian Eduardo Herrera, Ignacio Guillermo Herrera y Micaela Schörnig presentó breves notas en donde cuestionó la postura adoptada por el representante del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, efectuó una presentación el representante de la querella - UIF, por medio de la cual mantuvo los argumentos esgrimidos en la pieza casatoria. De este modo, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas.

**IV.** Efectuado el sorteo de estilo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: en primer término, el doctor Alejandro W. Slokar y, en segundo y tercer lugar, los doctores Diego G. Barroetaveña y Carlos A. Mahiques, respectivamente.

**El señor juez Alejandro W. Slokar dijo:**

**I.** Que, de primer orden, se impone memorar que el *a quo*, por mayoría, rechazó el sobreseimiento de los encartados en el entendimiento de que el art. 1 del decreto reglamentario n° 608/2024, en cuanto dispuso incluir el delito de asociación ilícita fiscal entre los tipos penales susceptibles de ser amnistiados por la aplicación de la ley n° ley 27.743, resulta inconstitucional.

Sobre el extremo, se observa que el juez Gavier indicó que: "...el Poder Ejecutivo de la Nación, al dictar el decreto reglamentario n° 608/2024, excedió sus facultades



reglamentarias consagradas constitucionalmente", habida cuenta que la inclusión del: "...delito de asociación ilícita fiscal (art. 15, inciso c, del Régimen Penal Tributario) entre los tipos penales susceptibles de ser amnistiados por [la] aplicación del art. 5 de la ley 27.743, alteró el espíritu y la finalidad que persigue la ley [...], vulnerándose, de este modo el principio de legalidad".

Asimismo, advirtió que: "...durante el debate parlamentario no se mencionó específicamente el delito de asociación ilícita fiscal dentro de los delitos susceptibles de extinción a través de la adhesión a la presente ley o a legislaciones anteriores sobre regularización y exteriorización de deuda".

En ese orden, refirió que: "El legislador no contempló esta figura, justamente, porque el tipo penal de asociación ilícita fiscal -a diferencia de otros delitos tributarios- no genera una obligación dineraria susceptible de ser 'cancelada', es decir, carece de contenido patrimonial. Y ese, es precisamente, el fin esencial de la ley 27.743, mejorar los niveles de recaudación a favor de la Hacienda Pública".

A mayor abundamiento, postuló que: "...lo que es susceptible de regularización son las obligaciones cuantificables, mientras que la actividad criminal organizada orientada a la comisión de los ilícitos tributarios queda excluida de las previsiones del legislador".

Así, concluyó que el delito previsto en el art. 15 inc. c de la ley 24.769: "...no queda abarcado dentro de la liberación prevista en el art. 5 de la ley 27.743" toda vez que: "...no solo perjudica al erario público, sino que

---

Fecha de firma: 19/03/2026

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA



#39564682#494061484#20260319113734856





## *Cámara Federal de Casación Penal*

también afecta al 'orden público', cuya vulneración no puede ser subsanada ni mediante blanqueo de bienes ni a través de pagos monetarios".

Por su parte, el juez Asís, compartió las consideraciones de su colega y agregó que: "...el Poder Ejecutivo Nacional [...] al incluir en el art. 1 del decreto reglamentario el delito de asociación ilícita fiscal [...] entre los tipos penales susceptibles de ser amnistiados por aplicación del art. 5 de la ley 27.743, desconoció el espíritu y la finalidad que persigue la ley reglamentada...", por cuanto del: "...debate parlamentario no surge la más mínima referencia a la posibilidad de extinguir la acción penal en relación al referido tipo penal".

Aunado a ello, sindicó que: "...en materia tributaria, concurre la imposibilidad legal de que el Poder Ejecutivo de la Nación pueda establecer regímenes de regularización de deudas tributarias que impliquen la eximición total o parcial del capital, intereses, multas u otra sanción derivada de infracciones relacionadas con los gravámenes cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la AFIP, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía (arts. 1 ley 25.678)".

Finalmente, justipreció que en el *sub lite*: "...al tratarse la asociación ilícita fiscal de un delito de peligro abstracto, para cuya configuración no [se] exige la concreción de una efectiva lesión al bien jurídico tutelado [...] cabe concluir que resulta conceptual y materialmente imposible que este tipo penal tributario pudiera estar alcanzado por las leyes de amnistía fiscal".

**II.** Que, sentado lo expuesto, corresponde referir el alcance del juicio de admisibilidad, pues no obstante la



decisión de poner los autos en días de oficina en los términos del art. 466 del ritual, se lleva dicho que esta cámara mediante un nuevo examen de la cuestión puede llegar a la conclusión que la impugnación presentada no reúne alguno de los requisitos formales exigidos por la ley procesal. Aquel juicio no es definitivo, y si se considera que el remedio es formalmente improcedente y ha sido mal concedido podrá desecharse sin que medie pronunciamiento sobre el fondo en cualquier momento, ya sea antes o después de la audiencia para informar o al tiempo para dictar sentencia (cfr., Sala II, causa n° 14.382, caratulada: "Quiroz, Osvaldo Daniel s/ recurso de casación", reg. n° 2137/13, rta. 4/12/2013, con sus citas).

Así, del análisis realizado en razón de lo previsto por los artículos 444 y 465 CPPN, surge la inadmisibilidad de la vía intentada, pues el ordenamiento procesal establece una limitación objetiva para la procedencia del recurso casatorio que, en lo sustancial, exige que se trate de hipótesis que revistan la calidad de sentencia definitiva o equiparable (Vid., Sala II, causas n° 14.137, caratulada: "Cetra, Luis María s/ rec. de casación", reg. n° 19.817, rta. 12/4/2012 y n° 14.786, caratulada: "Bustelo, Osvaldo y otra s/ rec. queja", reg. n° 19.935, rta. 11/5/2012, entre tantas otras), requisito que no se verifica en el *sub examine* ni tampoco los recurrentes lo han acreditado.

En este sentido, cuadra señalar que los escritos de interposición de los recursos de casación también carecen de la fundamentación mínima necesaria para demostrar su procedencia exigible según el art. 463 CPPN, toda vez que no se hacen cargo de rebatir los fundamentos

---

Fecha de firma: 19/03/2026

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA



#39564682#494061484#20260319113734856



## *Cámara Federal de Casación Penal*

de la decisión que se impugna, de modo de demostrar en qué consistiría el defecto de ese pronunciamiento.

En efecto, el pronunciamiento censurado ha sido sustentado razonablemente y el recurso sólo evidencia una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (Fallos: 302:284; 304:415; 308:423; 328:4461; 329:1493; 343:560; entre otros).

A todo evento, interesa recordar que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que la parte estime tales según su criterio divergente, sino que atiende sólo a supuestos en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos: 293:344, 274:462; 308:914; 313:62; 315:575), todo lo cual no se presenta en la especie.

Por lo demás, habrá de remitir a su criterio respecto de la inconstitucionalidad del decreto n° 608/2024, tal lo resuelto en la decisión del tribunal oral interviniente (cfr. Sala II, causa n° 62000069/2008/TO1/30/CFC4, caratulada: "Cuello, Fernando Luis y otros s/ recurso de casación", reg. n° 998/25, rta. 20/8/2025).

De tal suerte, corresponde declarar inadmisibles los recursos de casación interpuestos por la defensa pública oficial y la parte querellante -ambos sin costas- y por la defensa particular, con costas (arts. 444, 465, 530 y ccds. CPPN).

Así lo vota.

**El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:**

**I.** Que habremos de disentir, respetuosamente, con la propuesta formulada por el colega que nos precede en el



orden de votación, por los fundamentos que a continuación exponaremos.

**II.** De manera liminar cabe destacar que los recursos de casación interpuestos resultan admisibles ya que fueron interpuestos en legal tiempo y forma por quienes se encuentran legitimados para recurrir, habiéndose invocado la errónea aplicación de la ley sustantiva y puntualizándose además la queja contra la declaración de inconstitucionalidad dispuesta por el tribunal *a quo*.

En el presente asunto, la naturaleza de los agravios planteados por los recurrentes, así como también la demostración de un perjuicio actual de tardía o imposible reparación ulterior que podría generar la decisión dictada por el tribunal *a quo*, permiten equiparar el pronunciamiento atacado a uno de carácter definitivo y habilitar así esta instancia.

**III.** Sentado lo expuesto precedentemente, corresponde recordar que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de Córdoba resolvió, en fecha 20 de noviembre de 2024 y por mayoría: **"(I). -DECLARAR** la inconstitucionalidad del art. 1 del Decreto Reglamentario 608/2024, en cuanto dispone incluir dentro del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social, el delito previsto en el art. 15 inc. "c" de la Ley 24.769 (Asociación Ilícita Fiscal). **II.- NO HACER LUGAR al** pedido de sobreseimiento de los imputados Cristian Eduardo Herrera, Micaela Schörnig, Ignacio Guillermo Herrera y Carlos César Bonaldi en orden al delito de asociación ilícita fiscal efectuado por el Dr. Facundo Cortés Olmedo y el Defensor Público Oficial, Dr. Rodrigo Altamira (arts. 15 inc. C del Régimen Penal

---

Fecha de firma: 19/03/2026

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA



#39564682#494061484#20260319113734856



## *Cámara Federal de Casación Penal*

*Tributario Ley 27.430, 336 inc. 1 del CPPN y 59 inc. 2 del CP, a contrario sensu)".*

Que contra dicha resolución interpusieron recurso de casación la defensa particular de Cristian Eduardo e Ignacio Guillermo Herrera y Micaela Schörnig; la defensa pública oficial de Carlos César Bonaldi y la parte querellante Unidad de Información Financiera (UIF), los cuales fueron concedidos y mantenidos en esta instancia.

**IV.** Que, por otra parte, los fundamentos de la referida decisión fueron debidamente reseñados en el voto que antecede, correspondiendo, entonces, remitirse a aquéllos por razones de brevedad.

**V.** Que, a nuestro modo de ver, la resolución recurrida debe ser anulada, por los motivos que exponremos a continuación.

**VI.** Que hemos tenido oportunidad de expedirnos en fecha reciente, un caso similar al que aquí se trata en el precedente "Santiago" de la Sala IV de esta Cámara Federal de Casación Penal (cfr. causa FCB 12000035/2012/TO1/6/CFC3, "Santiago, Oscar Lucas y otros s/ recurso de casación", Reg. n° 857/25, rta. el 18/7/2025).

En aquella oportunidad, respecto de la posibilidad de incluir al delito de asociación ilícita fiscal en las previsiones del art. 5 de la Ley 27743, hemos señalado que "(e)n la tarea de interpretar la ley ha de tomarse en cuenta el contexto general y los fines que aquélla persigue y, con ese objeto, la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento de sus términos, que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador (Fallos: 327:1507 y 331:1215), ya que lo importante no es ceñirse a rígidas pautas gramaticales sino



computar el significado profundo de las normas (Fallos: 330:1927 y 338:1183, entre otros)".

En esa senda, recordamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sostuvo que "(l)a primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la aquélla y no puede llegar al extremo de exigir mayores requisitos que los que aquélla impone [...]" (Fallos: 343:625).

También se expuso que "(p)ara determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769). Este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312:802), cuidando que la inteligencia que le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310:937; 312:1484). Pero la observancia de estas reglas generales no agota la tarea de interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico, y con

---

Fecha de firma: 19/03/2026

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA



#39564682#494061484#20260319113734856



## *Cámara Federal de Casación Penal*

*el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal"* (cfr. CSJN, "Acosta, Alejandro Esteban" s/ infracción art. 14, 1° párrafo ley 23.737 - causa n° 28/05-", sentencia de fecha 23/4/08, considerando 6°).

En ese orden, es de relevancia destacar que, de acuerdo con la doctrina del cívico Tribunal, donde la ley no distingue no cabe hacerlo, pues si el legislador hubiera querido hacer distinciones, lejos de expresarse en términos generales hubiese hecho las salvedades o excepciones pertinentes (cfr. Fallos: 294:74; 330:2304; 333:735; 336:844; 337:567 y 342:1632, entre otros) y lo expuesto en los mencionados fallos aplica, a diferencia de lo sostenido por la mayoría del tribunal oral, a la casuística de este asunto.

Ha sostenido nuestro máximo Tribunal que "(L)a interpretación de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción" (cfr. Fallos: 303:578; 307:840; 310:937 y 2674 y 311:2223, entre otros).

Con sujeción a dichos lineamientos, en el caso "Santiago" consideramos -en línea con lo sostenido por el tribunal oral interviniente- que el legislador no tuvo la intención de excluir del régimen de regularización bajo examen al delito de asociación ilícita fiscal, pues de así haberlo querido lo hubiera prohibido expresamente.

Además, sobre la base de una interpretación armónica de los arts. 5, 34 y 41 de la Ley 27743, señalamos



que cuando el legislador ha querido excluir expresamente determinados delitos de los beneficios de extinción de la acción penal previstos en los regímenes de regularización de deudas y activos, lo ha hecho de manera inequívoca y taxativa (ver en tal sentido que el inciso "e" del art. 41, al enumerar de manera exhaustiva los supuestos de exclusión, dispone la no aplicación del régimen a quienes se encuentren procesados por los delitos allí indicados, "con excepción del inciso "k", el cual refiere específicamente a los delitos del Régimen Penal Tributario aprobado por el Título IX de la Ley 27.430 o la que en el futuro la reemplace).

Lo señalado precedentemente deja en evidencia que la asociación ilícita tributaria, en cuanto delito previsto dentro del Régimen Penal Tributario, no se encuentra estrictamente comprendida dentro de las exclusiones a la amnistía.

Que, en consecuencia, no cabe realizar interpretaciones extensivas que lleven a restringir el beneficio legal en trato ya que interpretarlo de ese modo afectaría el principio de legalidad en cuanto a la interpretación restrictiva en materia penal.

Que esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que, en el propio texto de la Ley 27743, el legislador ha demostrado que cuando ha querido excluir un delito lo ha hecho de forma expresa y sin ambigüedades.

Finalmente, no está de más precisar que el estudio de la cuestión exige que se tome en consideración la finalidad de la norma, en cuanto se establece como mecanismo de recaudación para la administración pública y de normalización de las situaciones de los contribuyentes.

---

Fecha de firma: 19/03/2026

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA



#39564682#494061484#20260319113734856





## *Cámara Federal de Casación Penal*

En esa línea, tal como hemos señalado en diversos precedentes, no debe desconocerse el innegable objetivo de lograr la obtención expedita del dinero adeudado que persiguen las leyes de regularización de deudas y obligaciones (en igual sentido, aunque se trataba de la Ley 27541, ver CFCP, causas CEUPESA S.A. y otros s/ recurso de casación", rta. el 15/3/2023, Reg. 233/2023, de esta Sala IV y La Cabaña de Buenos Aires SA y otro s/ recurso de casación", rta. el 8/8/2023, Reg. 838/23, de la Sala I).

Es pues con este horizonte que ha de ser interpretada, además, la norma y la voluntad del legislador en cuanto previó herramientas para la regularización y normalización de las situaciones de los contribuyentes que registraban incumplimiento en sus obligaciones fiscales, que constituyen para el Estado mecanismos de recaudación rápidos y efectivos que procuran el ingreso del dinero debido al fisco.

**VII.** Que a partir de lo reseñado precedentemente debe examinarse la constitucionalidad del decreto reglamentario 608/2024, cuya invalidez fue declarada por el tribunal oral.

Que conviene recordar que, para que un decreto reglamentario aparezca excediendo los límites de su validez desvirtuando la norma a la que refiere, es menester que restrinja prerrogativas o derechos que la norma reglamentada otorga. La facultad reglamentaria permite establecer pautas y requisitos que, por ser inherentes al espíritu de la norma, la complementan razonablemente dando sentido preciso a su finalidad.

Al respecto, es menester recordar que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el órgano dotado de



potestad reglamentaria está habilitado para establecer condiciones, requisitos, limitaciones o distinciones que respeten el espíritu de la norma, sirvan razonablemente a su finalidad, y no rebasen el ámbito en que la interpretación es opinable y posible la solución entre varias alternativas (Fallos: 308:1897; 313:433; 327:5002).

Asimismo, manifestó que la invalidez de un decreto no se configura necesariamente porque su texto sea distinto al de la ley objeto de reglamentación, sino porque aquél es contrario al espíritu y a los fundamentos de la ley en sentido formal (cfr. nuestro voto en el precedente "Santiago" antes citado).

Se agregó que el Poder Ejecutivo, a través del dictado de los decretos reglamentarios, en ejercicio de la potestad que prevé el inc. 2 del art. 99 de la Constitución Nacional, puede precisar distintos aspectos de la ley sancionada por el Congreso, pero, en ningún caso, puede alterar su espíritu mediante excepciones reglamentarias, ni menos aún derogar normas legales (Fallos: 322:752).

En ese orden, no se observa en el presente que las disposiciones del decreto reglamentario restrinjan derechos o alteren el espíritu o misión que buscó la sanción de la Ley 27743, ya que de las reglas aplicables al caso no surge -ni podría considerarse implícita- una voluntad del legislador para la interpretación restrictiva del régimen excepcional de extinción de la acción penal.

Así las cosas, yerra el tribunal de la anterior instancia al señalar que la interpretación literal, integral y sistemática de la norma y el examen legislativo, conduce a excluir a la asociación ilícita fiscal del régimen de liberación previsto en el art. 5 de la Ley

---

Fecha de firma: 19/03/2026

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA



#39564682#494061484#20260319113734856



## *Cámara Federal de Casación Penal*

27743, pues como ya hemos señalado, de así haberlo querido lo hubiera prohibido expresamente.

Que, en definitiva, no puede soslayarse que en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de legalidad y el correlativo principio de reserva (arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional) que imponen que toda restricción o exclusión a un derecho o beneficio de naturaleza legal debe surgir de manera clara, expresa e inequívoca de la norma que lo establece, por lo que se deriva que la interpretación extensiva en perjuicio del imputado resulta vedada.

Que, bajo tal premisa, el decreto reglamentario 608/2024 al especificar que la asociación ilícita tributaria es uno de los tipos penales que pueden ser regularizados no desnaturaliza la finalidad de la ley, sino que se limita a precisar sus alcances conforme a su espíritu y a los debates legislativos que la precedieron, en los que no hubo voz alguna que se haya pronunciado por una prohibición en ese sentido. De tal suerte, carece de sustento afirmar que el Poder Ejecutivo, al dictarlo, haya vulnerado la Carta Magna o excedido la potestad reglamentaria que le reconoce el art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional.

**VIII.** Por último, no pueden pasarse por alto los principios hermenéuticos sentados por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación en el caso "Acosta" ya citado, que consagran el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la *última ratio* del ordenamiento jurídico, y el principio *pro homine* que impone privilegiar la interpretación que más derechos acuerde al ser humano



frente al poder estatal; directrices que también nos inclinan a hacer lugar a los recursos bajo examen.

Esos también han sido nuestros lineamientos en otros casos relacionados con institutos del Régimen Penal Tributario en los que, al interpretarlos, señalamos que cuando la ley ha querido acotar o restringir alcances así lo ha prescrito expresamente y ponderamos, en tal sentido, la necesidad de efectuar una interpretación amplia de las normas que mejor salvaguarden el carácter subsidiario del derecho penal (ver nuestro voto en causa CPE 957/2016/8/2/CFC4 "CV1 Concesionaria Vial SA; DALLA TEA, Gustavo Horacio s/ recurso de casación", rta. el 11/11/2020, Reg. 1574/20, CPE 412/2019/11/CFC2, "La Cabaña de Buenos Aires SA y otro s/ recurso de casación", rta. el 8/8/2023, Reg. 838/23, "ROSES, Fernando Omar y otros s/ recurso de casación", FMZ 54017330/2009/37/CFC4, rta. el 18/10/21, Reg. 11906/21, y CPE 529/2016/210/27/CFC52 "LÓPEZ, María Amalia s/recurso de casación", rta. El 9/11/2023, Reg. 1335/23, de la Sala I de esta CFCP), favoreciendo a la vez el insoslayable fin recaudatorio que motiva regímenes de regularización como el que nos ocupa.

**IX.** En tal contexto, concluiremos que el pronunciamiento del tribunal de la instancia anterior incurre en error al excluir del beneficio de extinción de la acción penal a los imputados por el delito de asociación ilícita tributaria, cuando ni el texto de la ley ni su reglamentación contienen prohibición expresa en tal sentido.

Por ello, toda vez que asiste razón a lo expuesto por los recurrentes, corresponde dejar sin efecto la decisión recurrida al exhibir vicios de fundamentación que





## *Cámara Federal de Casación Penal*

impiden catalogarla como un acto jurisdiccional válido, tanto en lo relativo a la declaración de inconstitucionalidad del art. 1 del Decreto Reglamentario 608/2024 (punto dispositivo I) como, por derivación lógica, en cuanto rechazó los sobreseimientos solicitados por las defensas (punto dispositivo II), y, consecuentemente, devolver las actuaciones a la instancia anterior para que, previa sustanciación y verificación de los requisitos legales necesarios, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, teniendo en cuenta los lineamientos fijados en la presente resolución.

**X.** En función de lo expuesto precedentemente, proponemos al acuerdo: I. HACER LUGAR a los recursos de casación deducidos, sin costas; II. DEJAR SIN EFECTO los puntos I y II de la resolución recurrida; y III. DEVOLVER las actuaciones a la instancia anterior a fin de que, previa sustanciación, verificación de los requisitos legales necesarios y conforme al estado actual del expediente, se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, teniendo en cuenta los lineamientos fijados en la presente resolución.

Es nuestro voto.

**El señor juez Carlos A. Mahiques dijo:**

**I.** Sin perjuicio de lo sostenido en la causa Nro. FSM 34505/2018/TO1/75/CFC4, caratulada "Sosa, María Soledad s/ legajo de casación" (reg. 599/25, fecha 30/05/2025), a cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad, y sellada la cuestión en punto a la legitimidad activa de la Unidad de Información Financiera para recurrir en la presente impugnación, corresponde analizar la admisibilidad de la cuestión traída a estudio.



En virtud de ello, y con invocación de lo normado en el art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación, considero que los recursos interpuestos por las defensas y la parte querellante resultan formalmente admisibles, ya que del estudio de las cuestiones sometidas a inspección jurisdiccional surge que los recurrentes invocaron fundadamente la errónea aplicación de la ley sustantiva e inobservancia de las normas procesales. Además, el pronunciamiento cuestionado es de los contemplados en el art. 457 del CPPN.

**II.** Superado el juicio de admisibilidad, corresponde ingresar en el fondo de la cuestión.

Cabe recordar que sobre la inconstitucionalidad de la norma cuestionada ya me expedí de modo negativo al resolver *in re*: FSA 247746/2017/TO1/26/CFC9 caratulada "Huergo, Matías Luis (SECSA-ARCADIO) s/ recurso de casación" (CFCP - Sala III, Reg. 1325/25 fecha 27/11/25). En esa oportunidad se dijo: *"Es doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que 'la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos en la Carta Fundamental gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y obliga a ejercer dicha atribución con la sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos: 314:424; 319:178; 266:688; 248:73; 300:241), o exhiba una 'incompatibilidad inconciliable'" (cfr. Fallos: 322:842; y 322:919). De tal modo, una declaración como la pretendida, habrá de proceder cuando no medie la posibilidad de otorgarle a las*

---

Fecha de firma: 19/03/2026

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA



#39564682#494061484#20260319113734856



## *Cámara Federal de Casación Penal*

normas en juego una interpretación que se compadezca con los principios y garantías de la Constitución Nacional (cfr. CSJN: Fallos 310:500, 310:1799, 315:1958, entre otros).

La ley 27.743 estableció la posibilidad de extinción de las acciones penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, cuando se verifique la cancelación total de la deuda de las obligaciones, en las condiciones previstas en el régimen establecido (ver art. 5). El decreto nro. 608/2024, por su parte, especificó en el artículo 1 que era posible extinguir la acción penal de determinados delitos tributarios comunes, establecidos en el Régimen Penal Tributario del Título IX de la Ley N° 27.430, siempre que éstos se vinculen con obligaciones tributarias incluidas o canceladas en su totalidad, bajo las condiciones establecidas en el régimen de la ley 27.743.

Esta última disposición guarda conformidad con la ley que reglamenta, pues los delitos detallados en la norma cuestionada no fueron excluidos del régimen legal y expresamente se dispuso la necesidad de que se vinculen con obligaciones canceladas en las condiciones del régimen de regularización".

Conforme lo expuesto, habré de adherir a la solución propuesta por el distinguido colega preopinante, doctor Diego G. Barroetaveña, de hacer lugar a los recursos interpuestos, sin costas; dejar sin efecto los puntos I y II de la resolución recurrida y devolver las actuaciones a la instancia anterior a fin de que, previa sustanciación y verificación de los requisitos legales necesarios y conforme al estado actual del expediente, se



dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, teniendo en cuenta los lineamientos fijados en la presente resolución.

Tal es mi voto.

Por ello, en mérito al Acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, **RESUELVE**:

**HACER LUGAR** a los recursos de casación deducidos, sin costas; **DEJAR SIN EFECTO** los puntos I y II de la resolución recurrida; y **DEVOLVER** las actuaciones a la instancia anterior a fin de que, previa sustanciación y verificación de los requisitos legales necesarios y conforme al estado actual del expediente, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, teniendo en cuenta los lineamientos fijados en la presente resolución.

Regístrese, notifíquese, comuníquese (CSJN, AC. N° 10/2025) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

**Firmado:** Diego G. Barroetaveña, Alejandro W. Slokar y Carlos A. Mahiques. Ante mí: Walter Daniel Magnone.

